



Radiografía

Los derechos humanos van cuesta arriba



A nivel global, muchas cosas se han transformado en muy poco tiempo en el último año. Parece difícil entender y asimilar lo ocurrido, porque se vislumbra que los cambios y sus consecuencias son profundas. Algo sí ha quedado muy claro estos últimos meses: hablar de democracia y derechos humanos, y trabajar por ambos temas, es ahora una labor de alto riesgo y de mucha precariedad. Desde las altas esferas de poder a nivel mundial y nacional, los defensores de derechos humanos han sido calumniados, estigmatizados y perseguidos con más crudeza. Además, las organizaciones que acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos están siendo asfixiadas, lenta pero efectivamente, pues cada vez tienen menos recursos financieros y humanos para operar y acompañar a quienes son violentados. Desde el poder político, se han promovido leyes que gravan con impuestos los fondos que reciben las organizaciones de derechos humanos y se han reorientado los fondos de cooperación internacional a temas enfocados en el fortalecimiento de la represión de los Estados y a las apuestas bélicas.

En este contexto, aunque la situación de los derechos humanos a nivel mundial y nacional se vislumbre cuesta arriba, es cuando más urge hablar de ella. Renunciar a hablar de derechos humanos y renunciar a su visibilización y promoción es lo que pretenden quienes ahora están en el poder y promueven



proyectos económicos y políticos que impactarán con mayor crueldad la dignidad de quienes ya son vulnerables.

Valga decir que, en El Salvador, por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció hace unas semanas el inicio de una audiencia única especial, un juicio para las personas que han sido capturadas en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Eso quiere decir que, hoy en día, hay miles de personas que tienen casi cuatro años de estar privadas de libertad sin que hayan recibido ningún tipo de sentencia, sin ver a sus abogados, ni a sus familiares. Cuatro años de encarcelamiento injusto para quienes no tenían -ni tienen- ningún vínculo con pandillas ni antecedente delictivo. Todos ellos vistos por el gobierno salvadoreño como una especie de “daño colateral” o como “sacrificios necesarios”. Estas personas ahora serán sometidas a un juicio masivo donde también se tiene

previsto que las condenas sean masivas, dada la dificultad de la FGR para investigar con rigor cada uno de los casos presentados ante los tribunales.

A propósito del régimen de excepción, desde la narrativa gubernamental se promueve a El Salvador como el país más seguro del mundo gracias a la implementación de dicha política. Ciertamente, El Salvador ha experimentado una disminución importante de la violencia homicida y la desarticulación de la mayoría de las estructuras pandilleriles. Sin embargo, hablar de seguridad en toda la extensión de la palabra debería abarcar la garantía y el respeto de otros derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, el derecho a tener información sobre otros delitos que ocurren en el país, el derecho a una vivienda digna y el respeto a los derechos de los trabajadores. El Salvador es ahora un país donde, en los últimos meses, los derechos económicos y sociales de diversos sectores de la sociedad han sufrido graves afectaciones. El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció que durante 2025 fueron despedidos alrededor de 22,638 empleados públicos. De ellos, al menos 1,800 eran empleados del Hospital Nacional Rosales, el centro de salud público más grande del país.

Las comunidades que se encuentran en zonas de interés turístico también han sufrido violaciones a sus derechos. Al menos

45 comunidades de la zona central y oriental del país están enfrentando procesos judiciales de desalojo, según la organización MILPA. Mientras tanto, el centro de San Salvador, y el de otros distritos del país, atraviesan procesos intensos y acelerados de gentrificación, que ocasionan el desplazamiento forzado de vendedores ambulantes y antiguos habitantes de la zona, que ven comprometidos sus medios de vida. Las apuestas turísticas y de infraestructura también conllevan un enorme impacto ambiental que ha sido reiteradamente minimizado con el argumento de que es más importante promover el “desarrollo”.

Claramente, estamos frente a un proyecto económico que se sostiene a costa del sufrimiento y del despojo de los pocos medios de subsistencia con los que cuenta la población, no solo en El Salvador, sino también en otras regiones del mundo. Un proyecto ambicioso que también se sostiene tras haber arrebatado a nuestras sociedades de garantías mínimas para defender sus derechos y para controlar el poder político.

Pese a los tiempos de incertidumbre, de riesgos y disputa de sentidos, queda por delante el enorme reto de comprender y caracterizar las aristas y elementos que están determinando nuestra realidad, para proponer lecturas que den prioridad a la dignidad humana que, en nombre del “desarrollo”, está siendo cada vez más mancillada.